

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	110013343-064-2018-00315-00
Demandante	JOSEFINA ROJAS CÁCERES ¹
Demandado	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU ²

I. RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

Encontrándose el expediente al Despacho sería menester que el Juzgado fijara fecha para la audiencia inicial, no obstante, es preciso tener en cuenta que tanto el Decreto Legislativo 806 de 2020 como la Ley 2080 de 2021 establecieron nuevas reglas procesales para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otras, en lo que tiene que ver con el trámite de las excepciones; por lo que es necesario definir la aplicabilidad de las nuevas disposiciones procesales al caso en concreto.

II. ANTECEDENTES

Con la finalidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU** contestó oportunamente la demanda y propuso las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa (fls.166-184).

III. CONSIDERACIONES

La versión original de la Ley 1437 de 2011 en su artículo 180 señalaba que en el curso de la audiencia inicial, el juez o Magistrado Ponente resolvería «sobre las excepciones previas y las [mixtas] de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva» y, que de requerirse la práctica de pruebas para poder emitir un pronunciamiento al respecto, se suspendería la diligencia para recaudarlas por un término máximo de 10 días, tras el cual se reanudaría la audiencia y se decidiría la respectiva excepción. Así mismo, la norma establecía que el auto que decidiera sobre las excepciones sería susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

¹ Correo electrónico: corposerviltada@hotmail.es. Celular: 3112519589.

² Correos electrónicos: notificacionesjudiciales@idu.gov.co, jose.duarte@idu.gov.co y fernando@duartegonzalez.com.

Éste panorama normativo cambió radicalmente luego de la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020 y de la Ley 2080 de 2021, como pasa a explicarse:

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN EL DECRETO LEY 806 DE 2020

El artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 señaló, que durante los dos años siguientes a su expedición, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo las excepciones se tramitarían de la siguiente manera:

«Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, en el curso de esta las practicarán. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez; subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.» (Subrayado fuera del texto).

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN LA LEY 2080 DE 2021

Ahora bien, en lo que respecta al trámite y decisión de las excepciones en el proceso contencioso administrativo, el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, derogó tácitamente el artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 antes comentado, y de forma expresa, modificó el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, para agregarle a éste último un segundo párrafo, del siguiente tenor:

«Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:

(...)

Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término,

la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A»

Se insiste, que de acuerdo con la versión original de la Ley 1437 de 2011, artículo 180, numeral 6, las excepciones previas debían ser resueltas en el marco de la audiencia inicial. Pero, a partir de la expedición de la Ley 2080 de 2021, artículo 38, como se ha expuesto, las excepciones previas se decidirán atendiendo al procedimiento establecido en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, es decir, a través de un auto por escrito, antes de la audiencia inicial.

IV. EL CASO CONCRETO

En el presente asunto, se tiene que en vigencia del texto original de la Ley 1437 de 2011 la demanda que origina la presente causa judicial, fue admitida (fls.85-86), de igual modo se tiene que también en vigencia de la versión original de la norma en comento, la parte demandada INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU contestó la demanda (fls.164-184); la Secretaría del Despacho dio traslado de las excepciones formuladas por el extremo pasivo al contestar la demanda (fl.229).

Por lo anterior, como quiera que en el proceso de la referencia no hay términos corriendo, ni trámite o diligencia alguna iniciada que esté pendiente de resolución, al sub judice le son perfectamente aplicables las normas de índole procesal previstas en la Ley 2080 de 2021, según el principio del *efecto general inmediato* consagrado en el régimen de vigencia y transición de dicha ley.

Bajo ese parámetro corresponde al Despacho resolver las excepciones previas propuestas por el demandado, antes de la audiencia inicial, a través de auto por escrito, en aplicación de las nuevas reglas procesales señaladas en la Ley 2080 de 2021.

Estudio de las excepciones previas en el caso concreto

- Falta de legitimación en la causa por activa

Los argumentos de la parte demandada para sustentar esta excepción fueron los siguientes:

“De los documentos que se analizaron y que forman parte del proceso, tanto los allegados por la actora como los antecedentes administrativos que se adjuntan con la presente contestación, se erige sin dificultad el medio exceptivo de ausencia de legitimación en causa por activa, pues como lo hemos venido reseñando, ninguno de los predios de que trata el presente asunto, eran de propiedad de Josefina Rojas Cáceres al momento de realizar el trámite administrativo de compra voluntaria o expropiación en términos de la utilidad pública autorizada por la ley 388 de 1997.

(...)

En el caso que se estudia la parte demandante conforme a los hechos que plantea, considera que por haber sido titular de los predios en disputa en algún momento jurídico, le es suficiente para reclamar del Instituto de Desarrollo Urbano perjuicios que considera causados por no haber ofertado y pagado el valor del predio cuando a su juicio ella era la propietaria de estos. Ese es el debate judicial que plantea la actora y con ello se verifica esa relación sustancial que permite habilitarla para que a través del proceso judicial se verifique si en ella concurre materialmente el derecho que reclama.

Luego a pesar de que sustancialmente se entraba la Litis, la resolución del conflicto que habrá de adoptar la judicatura será al momento de dictar el fallo respectivo, pues es allí donde eventualmente, bajo las apreciaciones probatorias que se adjuntan con la demanda y la contestación y el decreto y práctica de pruebas se verificará si la demandante tiene causa legítima para reclamar el resarcimiento de un daño antijurídico.

En ese sentido, tal como expuesto en la ausencia del daño antijurídico, ninguno de los predios al momento de la operatividad administrativa realizada por el IDU era de la demandante y consideramos con total precisión que aquella carece definitivamente de legitimidad en causa para reclamar compensación económica alguna.”

- Caducidad

“Varias cosas se desprenden del estudio de los documentos que soportan las pretensiones demandadas. Los dos predios iniciales en

disputa... sobrellevan sentencias judiciales preferidas el 13 de junio de 2014 y auto del 31 de julio de 2015, debidamente registrados en los folios de matrícula de cada uno de los predios, por lo que desde aquella época necesariamente la actora o su apoderado tuvieron conocimiento de tales circunstancias.

Pero, además, en marzo 6 de 2006, el señor Nazario Salamanca León, como apoderado general de la señora Josefina Rojas Cáceres, en escrito dirigido al señor Registrador de Instrumentos Públicos de la Zona Sur informa el conocimiento que tiene de los procesos de pertenencia y en dicha comunicación le dice:

‘Ahora bien fui enterado el día 26 de febrero del año en curso que se habían adelantado un proceso de pertenencia, pero sobre la matrícula de mayor extensión número 50S-794925, incorporado los barrios Mirador y Paraíso, y que involucra a su vez algunos predios que ya tienen dirección y matrículas propias con base en el loteo adelantado pro nosotros sobre nuestras matrículas 860496 y 40025006.

Como esta situación ha generado un conflicto de intereses , ya que aparecen los mismos predios, pero con matrícula diferentes y en algunos casos tres matrículas para un solo predio, le solicito indicarme de manera precisa cuáles son los mecanismos legales que podemos utilizar para hacerle claridad a la comunidad ya que no solamente se presentaron irregularidades, sino que fallaron pertenencia sobre predios que habían sido escriturados recientemente.’

Y dentro de dicho escrito precisamente mencionó dos de los predios aquí en disputa. El identificado con la matrícula 50S-40429621 y que se le asignó la matrícula inmobiliaria 50S-40455980 que es sobre el que el IDU realizó la expropiación; y, el identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-40429516 al que se le asignó la matrícula inmobiliaria 50S-40455967 sobre el cual recayó también la expropiación administrativa. Luego entonces, para haber realizado esta petición, necesariamente tuvo conocimiento de los registro públicos de ambos inmuebles y el registro de pertenencia.

Además, la abogada Yuli Fernanda Pulido Durán actuando como apoderado especial de Josefina Rojas Cáceres remitió un escrito a la Dirección Técnica de Predios el 18 de noviembre de 2015 en donde le notifica al IDU la titularidad de los predios en cabeza de su cliente y allí le indica la existencia del segundo de los predios de que trata este proceso, el identificado con el número 50S-40429610, el cual, como ya lo expusimos en la contestación de los hechos, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá de fecha 13 de junio de 2014

modificado por el auto del 31 de julio de 2015, le declaró la pertenencia adjudicando el derecho de propiedad a los señores Levi Camargo Páez identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.201.484 y Leonor Gutiérrez Franco, identificada con la cédula de ciudadanía 39.631.435 registrada en el folio de matrícula 50S-40716285.

En virtud de lo anterior, el hecho que mediante el radicado 20173250575331 del 21 de junio de 2017 le hubiese indicado acerca de los predios para expropiar, no significa que solo desde ese momento tuvo conocimiento de los hechos que sustentan la presente demanda. En dicho radicado se le informó que el trámite administrativo de los predios en disputa estaba siendo manejados por sus verdaderos titulares quienes habían ganado la titularidad a través de los procesos de pertenencia cuyas sentencias datan del año 2014 y 2015 respectivamente y cuya copia le fueron entregadas. Luego entonces, el documento lo que hizo fue ratificarle que los predios por los cuales pretendía reconocimiento estaban en cabeza de otro titular y en ese orden de ideas, conforma una vez más el conocimiento que tenía sobre la problemática que plantea ahora a través del escrito demandatorio.

En ese estado de cosas, definitivamente la acción de reparación directa que se reclaman se encuentra caduca, pues se reitera que la demandante, a través de su apoderado general, no solamente conocía la problemática de los procesos de pertenencia sino que cuando hizo la solicitud de aclaración al registrador en escrito del 6 de marzo de 2006 ya sabía que los predios, que ahora le reclama al IDU, tenían asignada una matrícula independiente y que fue sobre las que se hicieron los trámites administrativos de expropiación.

Con las consideraciones anteriores, le solicito al señor Juez declarar la caducidad de la acción de reparación directa y proceder al archivo del proceso una vez dicha decisión alcance la ejecutoria.”

Pronunciamiento del Despacho sobre las excepciones propuestas

-. Sobre la falta de legitimación en la causa por activa

Ha establecido el Consejo de Estado que “**la legitimación en la causa de hecho** alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; **la legitimación material**, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora

porque dieron lugar a la producción del daño... por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.”³

El Despacho observa que los argumentos planteados por el IDU en sustento de su solicitud, se encuentran encaminados a desvirtuar la legitimación en la causa material por activa de la demandante; asunto que corresponderá abordar al momento de proferir sentencia, verificando el material probatorio recaudado, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto se declarará **IMPRÓSPERA Y NO PROBADA** la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la parte demandada.

- Sobre la caducidad

Al respecto el Despacho confirma el análisis efectuado sobre este tópico en el auto admisorio de la demanda de fecha 9 de diciembre de 2019 (fls.154-155).

El apoderado del IDU alude en su argumentación que de tiempo atrás la propietaria de los inmuebles, hoy demandante, conocía de la problemática registral y de los procesos de pertenencia que sobre algunos de esos predios se habían adelantado; no obstante, dichas circunstancias distan del hecho que la entidad demandada estuviera adelantando las gestiones administrativas tendientes a su adquisición o expropiación con las personas que aparecían como titulares del derecho de dominio, que fue lo que mediante el oficio 20173250575331 de fecha 21 de junio de 2017 informó el IDU a la hoy demandante.

De este modo, como ya se indicó, se ratifica la conclusión a la que llegó el Despacho en el auto admisorio, y al contar el término de caducidad desde el 21 de junio de 2017 y, al haberse radicado la demanda el 18 de octubre de 2018, se tiene que el medio de control fue activado oportunamente.

En el anterior contexto no es viable la excepción de caducidad, la cual se declarará **NO PROBADA E IMPRÓSPERA**.

Por lo anterior el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS E IMPRÓSPERAS las excepciones previas de falta de legitimación en la causa por activa y caducidad **propuesta por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU**, de conformidad a la parte motiva de la presente providencia.

³ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de febrero de 2010. Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente providencia **ingrésese** el expediente al Despacho para fijar fecha y hora de audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PÁRRA
JUEZ

CASZ